



Serie Investigación

GUERRA Y CONFLICTOS
CONTEMPORÁNEOS.
REFLEXIONES GENERALES
PARA EL CASO COLOMBIANO

Miguel María Benito Lázaro
César Augusto Niño González
Coordinadores



UNIVERSIDAD
SERGIO ARBOLEDA

**GUERRA Y CONFLICTOS
CONTEMPORÁNEOS.**
Reflexiones generales para
el caso colombiano

Miguel María Benito Lázaro
César Augusto Niño González
Coordinadores



UNIVERSIDAD
SERGIO ARBOLEDA

Guerra y conflictos contemporáneos: reflexiones generales para el caso colombiano / editores Miguel M. Benito Lázaro, César A. Niño González – Bogotá: Universidad Sergio Arboleda, 2018.

211 p.

ISBN: 978-958-8987-84-2 (rústica)

1. GUERRA - HISTORIA 2. GUERRA - COLOMBIA 3. VIOLENCIA - COLOMBIA 4. CONFLICTO ARMADO – COLOMBIA I. Benito Lázaro, Miguel M., editor II. Niño González, César A., editor III. Título 303.6609861 ed. 21

© **GUERRA Y CONFLICTOS CONTEMPORÁNEOS.**
Reflexiones generales para el caso colombiano

José Ángel Hernández García
Miguel M. Benito Lázaro
Jorge H. Rincón Ochoa
Saúl M. Rodríguez
Jerónimo Ríos Sierra
Daniel Arturo Palma Álvarez
Hernando Correa Peraza
César Augusto Niño González
Miguel M. Benito Lázaro
César A. Niño González

ISBN: 978-958-8987-84-2 (*rústica*)

ISBN: 978-958-8987-85-9 (*.pdf*)

Universidad Sergio Arboleda

Edición: Cindy Lorena Roa Ovalle
Carlos Andrés Caho Rodríguez

Junio de 2018.

Fondo de Publicaciones de la
Universidad Sergio Arboleda.

Queda prohibida toda reproducción por cualquier
medio sin previa autorización escrita del editor.

El contenido del libro no representa la opinión de la
Universidad Sergio Arboleda y es responsabilidad del
autor.

Coordinadores:

Miguel María Benito Lázaro
César Augusto Niño González

Director del Fondo de Publicaciones:
Jaime Arturo Barahona Caicedo
jaime.barahona@usa.edu.co

Diagramación:

Jimmy F. Salcedo Sánchez

Calle 74 No. 14-14.

Teléfono: (571) 325 7500 ext. 2131/2260.

Bogotá, D.C.

Calle 18 No. 14A-18.

Teléfonos: (575) 420 3838 - 420 2651.

Santa Marta.

www.usergioarboleda.edu.co

Impresión: DGP Editores

Bogotá, D.C.

*Los coordinadores y autores dedican este libro a la memoria
de Hernando Correa Peraza, colega y amigo (D. E. P.)*

Contenido

PRÓLOGO	7
LA MÁQUINA DE LA GUERRA CONTEMPORÁNEA: EVOLUCIÓN HISTÓRICA	13
<i>José Ángel Hernández García</i>	
LA INTERVENCIÓN HUMANITARIA Y EL PROBLEMA DE LA REGULACIÓN DE LOS NUEVOS CONFLICTOS EN LA POSGUERRA FRÍA	37
<i>Miguel M. Benito Lázaro</i>	
LA VIOLENCIA EN EL EJERCICIO DE CONSOLIDACIÓN DE LA NACIÓN COLOMBIANA.....	59
<i>Jorge H. Rincón Ochoa</i>	
COLOMBIA ENTRE LOS ALTIBAJOS DEL CONFLICTO Y LA PAZ: UNA MIRADA HISTÓRICA.....	79
<i>Saúl M. Rodríguez</i>	
ESTADO Y PARAESTADO EN EL CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO. UNA APROXIMACIÓN TEÓRICA DESDE LA SOCIOLOGÍA.....	107
<i>Jerónimo Ríos Sierra</i>	
HUMANIZACIÓN Y DESHUMANIZACIÓN EN EL CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO: LA DIVISIÓN DE LA COMUNIDAD ENTRE “NOSOTROS” Y “ELLOS”	131
<i>Daniel Arturo Palma Álvarez</i>	
EL ALETEO DE UNA MARIPOSA: EL EFECTO DEL NARCOTRÁFICO EN EL CONFLICTO COLOMBIANO	153
<i>Hernando Correa Peraza</i>	
LAS “SEGURIDADES” Y EL TERRORISMO: REFLEXIONES PARA UNA COLOMBIA CONTEMPORÁNEA.....	179
<i>César Augusto Niño González</i>	
EPÍLOGO	201
<i>Miguel M. Benito Lázaro</i>	
<i>César A. Niño González</i>	

COLOMBIA ENTRE LOS ALTIBAJOS DEL CONFLICTO Y LA PAZ: UNA MIRADA HISTÓRICA

Saúl M. Rodríguez¹

Introducción

Colombia es uno de los países más contradictorios en el escenario mundial. Esta frase puede sonar bastante chocante para aquella persona que no está familiarizada con la historia colombiana, debido a que esta sociedad ha experimentado todo tipo de situaciones buenas y malas a través del siglo XX y los albores del XXI; contantemente, aparece en las titulares de prensa a nivel mundial, usualmente por hechos catastróficos que tienen que ver con el largo conflicto armado interno, la guerra contra las drogas, corrupción, y numerosos altibajos en temas políticos y económicos. Tal vez la situación más significativa se encuentra en el hecho que este país ha experimentado un fuerte conflicto armado interno por cerca de sesenta años, con múltiples actores involucrados y que ha ocasionado más de 250.000 muertes y cerca de seis millones de personas desplazadas (GMH, 2013). Curiosamente, este país tiene una estabilidad económica inusitada, si se le compara con los demás países de América Latina, pero al mismo tiempo, es el segundo país más desigual de la región (Monterrosa, 16 de noviembre de 2017).

Por otro lado, la democracia electoral es vigorosa y ha estado activa desde los años cincuenta del siglo XX, lo cual parecía ser un excelente signo de la solidez de este sistema político; sin embargo, la abstención y la falta de participación de amplias mayorías parecen ser una constante recurrente en su historia reciente; además, el disentimiento político y el activismo en derechos humanos son actividades altamente riesgosas. Colombia es un país con una riqueza social, cultural y medio ambiental, únicas en el mundo, debido a su posición geográfica y la mezcla del elemento indígena, español

¹ Docente-Investigador del Departamento de Historia de la Universidad Sergio Arboleda. Correo electrónico de contacto: saul.rodriguez@usa.edu.co.

y africano que han hecho su sociedad altamente diversa, produciendo una increíble cantidad de artefactos culturales, música, alimentos, entre otros. Sin embargo, un elemento que parece estar muy presente a lo largo de los años es la violencia recurrente. Una mezcla de exclusión social, intolerancia, imposibilidad de dirimir los problemas de un modo civilizado y la profunda brecha entre las zonas urbanas y rurales, donde la pobreza es un elemento persistente, a pesar de toda la riqueza disponible.

En los últimos años, la imagen del país dentro de la comunidad de países ha cambiado notablemente, debido en parte a la mejora en los indicadores económicos, políticos y sociales, y sobre todo por la exitosa campaña militar contras las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el posterior proceso de paz con este grupo armado ilegal para acabar con el largo conflicto armado. En este sentido, en este artículo se mostrarán algunos de los aspectos más relevantes respecto al conflicto armado interno y la paz en Colombia desde una perspectiva histórica o de larga duración. Un largo proceso que se ha caracterizado por varios problemas y dificultades, que tienen raíces muy profundas. Por lo tanto, en la primera parte de este texto se explicarán algunos aspectos históricos del conflicto armado interno, sus causas y principales hitos. En la segunda parte, se analizarán los principales esfuerzos para alcanzar la paz en diferentes etapas de la historia contemporánea del país. En la tercera parte, se expondrán los principales aspectos de las conversaciones de paz entre el gobierno de Colombia, en manos de Juan Manuel Santos, y la guerrilla de las FARC que condujeron a la firma de un acuerdo en 2016, y los inconvenientes y expectativas que surgieron de éste.

Conflicto y violencia en la historia reciente de Colombia. Una mirada estructural de larga duración

La historia reciente de Colombia ha estado inmersa en el caos y el desorden. Este país del norte de Suramérica ha tenido una historia problemática prácticamente desde su independencia de la corona española a comienzos del siglo XIX. En efecto, a lo largo de los años, Colombia ha sido un país donde la construcción del aparato estatal ha sido muy difícil, a su vez que la construcción de un sentimiento nacional ha sido bastante precario, esto, en parte, debido a las diferencias regionales, la brecha socio-económica,

la precariedad de la economía, un tradicionalismo arraigado, un fuerte distanciamiento de la realidad internacional y una tradición de ilegalidad bastante común. Todas estas situaciones adversas no han sido manejadas apropiadamente por los líderes políticos, quienes se han caracterizado por tener una visión muy reduccionista respecto a estas situaciones, lo cual, sumado a una ruda y fragmentada geografía, ha producido una sociedad explosiva, la cual ha sido bastante difícil de controlar. Para el historiador John Alexander Pedreros (2016), guerra y violencia, parecen ser dos constantes en la historia colombiana más que una anomalía, los conflictos internos han sido recurrentes, entre estos: la Guerra entre centralistas y federalistas (1810-1815), la Guerra de Independencia (1810-1824), la Guerra de los Supremos (1839-1841), la Guerra civil de 1851, la Guerra civil de 1854, la Guerra civil de 1860-1862, la Guerra civil de 1876-1877, la Guerra civil de 1884-1885, la Guerra civil de 1895, la Guerra de los Mil Días y la entrega de Panamá (1899-1903), la Violencia de los años 30, *La Violencia* (1948-1966), el Conflicto armado interno (1964-hasta la fecha). Por el contrario, las guerras interestatales han sido hechos marginales en la historia local; los ejemplos son escasos y limitados a pocas y cortas campañas militares, tales como el conflicto colombo-peruano en la región amazónica (1932) y la exótica participación colombiana en la guerra de Corea, siendo las dos acciones muy marginales y desarrolladas en zonas distantes del conjunto del país.

En contraste con los países vecinos, Colombia tuvo serias dificultades para encontrar un recurso natural o industrial que fuera vendible en el mercado internacional, el cual ayudara al país a salir de sus problemas económicos y que fuera útil para ayudar a crear un estado moderno, tal y como sucedió en Argentina y México en el siglo XIX, e incluso en Venezuela durante el siglo XX. Únicamente el café cumplió esta función, si bien, con altos y bajos en los precios, los cuales respondían a la demanda del mercado internacional que evitó un flujo constante de recursos para el país (Kalmnovitz, 2003). Por otro lado, la sociedad colombiana llegó a estar inmersa durante gran parte del siglo XIX y XX en una espiral de violencia y pobreza muy profundos. No obstante, las causas de las guerras civiles y la violencia no pueden ser asociadas solo a estos factores, sino a un complejo conjunto de factores bastante diferentes entre sí a lo largo de los años. Mientras que en el siglo XIX estuvieron relacionados con la disputa entre los partidos

tradiciones (Liberal y Conservador) respecto a temas religiosos y de antagonismo sobre la forma de organizar el Estado; en la violencia de los años treinta y la de los cincuenta y sesenta estos factores fueron una mezcla de lucha por principios partidistas y demandas económicas debido a la mutua exclusión del partido que perdía el poder político (Palacios, 2006).

En este ambiente puede ser ubicado el comienzo del conflicto armado interno. Específicamente a finales de los años cuarenta, cuando el líder político del Partido Liberal y candidato presidencial, Jorge Eliecer Gaitán fue asesinado en extrañas circunstancias (Braun, 1987). Lo anterior desencadenó una violencia fratricida a lo largo y ancho del país entre los seguidores de ambos partidos políticos. En un escenario de mutua recriminación por el origen de la violencia, cerca de 200.000 personas murieron (Guzmán, Fals-Borda y Umaña, 2005). Para *des-escalar* esta ola de violencia en el país, fue necesaria la llegada de un militar al poder, el general Gustavo Rojas Píñilla (1953-1957), quien patrocinado por las elites políticas estuvo a cargo de pacificar el país, lo cual cumplió parcialmente (Sáenz, 2002; Donadio y Galvis, 2002). Varios bastiones armados del partido liberal siguieron combatiendo activamente contra el Estado durante finales de los cincuenta y comienzos de los sesenta, particularmente en el departamento del Tolima. Por esta razón, las Fuerzas Armadas de Colombia lanzaron una operación militar, la cual sería conocida como Operación Marquetalia (1964), contra un grupo de campesinos armados, que previamente habían sido ideologizados con ideas radicales de izquierda, conocidos más tarde como Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Medina, 1986).

Entre los años sesenta y ochenta, varios grupos guerrilleros de izquierda emergieron en Colombia con varias tendencias políticas y metas, los cuales seguían una larga tradición de guerra irregular contra el Estado que se remonta a fechas tan tempranas como el siglo XIX. Estos grupos demandaban cambios radicales en la estructura económica, política y social. Algunos de los más conocidos fueron y son: el Ejército de Liberación Nacional (ELN) (1964), el Ejército Popular de Liberación (EPL) (1965), el Ejército Revolucionario de los Trabajadores (PRT) (1965). Igualmente, en este escenario de radicalización surgieron otros grupos *sui generis* como el M-19 (1970) y el “Movimiento Armado Quintín Lame” (1984). El primero

de estos estaba conformado por personas de clase media de las ciudades, quienes como grupo armado, llevaron a cabo una serie de acciones espectaculares contra las autoridades como el robo de la espada de Bolívar (1974), el robo de armas en el Cantón Norte (1978), la toma de la embajada de la República Dominicana en Bogotá (1980) y la tristemente célebre toma del Palacio de Justicia (1985), donde murieron docenas de personas inocentes en el fuego cruzado entre esta guerrilla y las Fuerzas Armadas (Rodríguez, 2012a). El segundo grupo estaba conformado por indígenas del departamento del Cauca, quienes en un acto de desesperación por la violencia ejercida contra ellos, decidieron organizar una guerrilla para proteger su comunidad. Este grupo llevó a cabo acciones espectaculares contra sicarios y paramilitares, con precisión militar, pagados por terratenientes y élites locales.

Mientras varios grupos guerrilleros continuaron actuando con unas características singulares como una manifestación marginal de la lucha entre Este y Oeste, múltiples actividades relacionadas con la producción de drogas ilícitas tuvieron un florecimiento en el país, en gran medida, debido a la demanda internacional por este tipo de recursos, la tradición de contrabando en el país y la permisividad de las autoridades locales respecto a estas actividades. En un primer momento, el interés internacional por la marihuana convirtió a Colombia en la “tierra prometida” en este tipo de producción, particularmente la región caribe, entre los años sesenta y setenta. En este periodo, conocido como la “bonanza marimbera”, pequeñas mafias mezclaron la tradición local de violencia con una eficaz administración de este negocio ilegal, lo cual les permitió capturar la producción, embarque y distribución de este producto.

Más tarde, y tomando ventaja de la posición geoestratégica de Colombia como un corredor natural entre el sur y el norte de América, los traficantes locales se convirtieron en intermediarios en el tráfico de cocaína, la cual provenía de Perú y Bolivia, gracias a la masiva demanda de los consumidores de los Estados Unidos entre los años setenta y ochenta. Durante esta etapa, surgieron varias mafias como los carteles de Medellín y Cali, las cuales incrementaron su poder y habilidades en este negocio ilegal. Estos no solo controlaron el tráfico, sino también se hicieron cargo de la

producción masiva de coca y amapola en el territorio colombiano entre mediados de los ochenta y comienzos de los noventa destinadas a la producción de cocaína y heroína para exportar a los Estados Unidos y Europa (Thoumi, 1994). Esta situación trajo consigo inusitadas consecuencias para Colombia, un país con un ambiente bastante caldeado. Por un lado, los narcotraficantes lograron un lugar privilegiado en el contexto de la sociedad debido a su exagerada riqueza e influencia violenta, con las cuales corrompieron varios niveles de la estructura política, desde el nivel municipal hasta el nacional. Por otro lado, la masiva producción de sustancias ilícitas hizo que poco a poco las guerrillas de izquierda, principalmente las FARC, llegaran a ser protectores de los cultivos ilícitos, en una tensa relación con los narcotraficantes, quienes pagaban una especie de impuesto conocido como “gramaje”, por sus servicios armados. En años noventa, la estructura estatal experimentó un progresivo deterioro y los líderes políticos y gobernantes entraron en una sin salida, debido a la agresividad de los narcotraficantes, particularmente Pablo Escobar, líder natural del Cartel de Medellín, quien inició una serie de ataques contra el Estado y la sociedad para presionar la cancelación de la extradición a los Estados Unidos. Para lograr esta meta, Escobar patrocinó el asesinato de varios políticos, incluyendo el candidato presidencial Luis Carlos Galán (1990), y las bombas contra el edificio del DAS y el avión de Avianca, ambas en 1989. Probablemente, este fue el periodo más terrorífico en la historia reciente de Colombia y, de cierto modo, un solo hombre fue capaz de presionar a las instituciones locales, incluso más que las guerrillas mismas a través de los años. Estados Unidos y Colombia, en medio del contexto de la guerra contra las drogas, unieron fuerzas para capturar a este criminal, quien fue finalmente dado de baja en 1993 en una operación realizada por la Policía de Colombia (Castro, 2012).

“Los noventa” fue un periodo de distensión en el contexto mundial y el comienzo de una nueva era después del colapso de la Unión Soviética y el bloque socialista. América Latina no fue ajena a estos hechos, pues varios conflictos armados internos que se habían intensificado a lo largo de los años llegaron a su fin. Esto debido a la falta de un patrocinador y promotor externo, los conflictos finalizaron en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua y, al mismo tiempo, varios países de la región experimentaron un periodo de transición a la democracia después de fuertes dictaduras

militares, entre estos Chile, Brasil, Argentina y Uruguay (Garreton, 1997). No obstante, en este mismo periodo, Colombia de nuevo mostró su singularidad si se le compara con los países vecinos, por lo menos por tres razones: primero, algunos grupos guerrilleros depusieron sus armas como el M-19, el “Quintín Lame”, el EPL y el PRT; sin embargo, los más agresivos militarmente hablando se mantuvieron activos: las FARC y el ELN. Segundo, el tráfico de drogas le dio un nuevo ímpetu al conflicto armado interno, porque los grupos armados ilegales tuvieron un nuevo y amplio recurso disponible para financiar su accionar armado. Tercero, en 1991, fue adoptada una nueva Constitución Política que permitió a las minorías y sectores excluidos de la sociedad participar de una manera más directa en la democracia; sin embargo, debido a la intensificación del conflicto armado interno fue difícil y peligroso ejercer los derechos ciudadanos en las periferias y zonas más alejadas de los centros urbanos debido al progresivo accionar criminal de varios grupos.

Mientras que en otros países de América Latina, la esperanza fue uno de los rasgos definitorios en los años noventa, Colombia, por su parte, experimentó un periodo de caos y violencia, donde el tráfico de drogas y las acciones de los grupos armados ilegales contra el estado se incrementaron notablemente y los problemas económicos fueron una constante para la mayoría de los colombianos; sobre todo, la crisis económica de 1997-1998, que quebró a varias familias y empresas nacionales (Rodríguez, 2006). Por otro lado, entre 1996 y 1999, las FARC actuaron con total agresividad contra el Estado y la sociedad, y llevaron a cabo ataques masivos contra unidades de las Fuerzas Armadas de Colombia, particularmente en la región sur del país, tratando de presionar al gobierno colombiano para que cediera a sus iniciativas. Entre los más significativos ataques militares se encuentran el ataque a la Base Militar de las Delicias, la Base de Comunicaciones de Patascoy, igualmente, la destrucción de una unidad de élite del Ejército en el municipio de El Billar en Caquetá, y la captura por algunos días de la ciudad de Mitú (Torres, 2008). En este momento particular de la historia, la sociedad colombiana estaba inmersa en un escenario de ansiedad e incertidumbre, lo cual causó que algunos académicos y funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos señalaran que Colombia era un “estado fallido” (Rodríguez, 2006).

Primero, en este contexto, el presidente Andrés Pastrana inició un proceso de paz con las FARC, llevado a cabo en lo que se denominó como la “Zona de distensión”, tratando de finalizar el conflicto armado con este grupo armado ilegal. Segundo, Pastrana inició un proceso de reestructuración militar para mejorar la capacidad de combate de las Fuerzas Armadas de Colombia, previendo un posible fracaso en las negociaciones, la cual consistió en incrementar el número de soldados voluntarios-profesionales, la compra de equipo aéreo (aviones y helicópteros), y el reentrenamiento de tropas de élite como brigadas móviles, batallones de contraguerrilla y batallones de selva con una directriz estadounidense (Rodríguez, 2008). Tercero, y muy relacionado con el anterior punto, Estados Unidos patrocinó a Colombia con un plan de ayuda económica y militar denominado “Plan Colombia”, el cual pretendía apoyar las instituciones civiles y militares para contribuir a la reconstrucción del Estado, particularmente en aquellas regiones donde las FARC se resguardaban y estaban a cargo de la producción de drogas ilegales al servicio de sus intereses políticos y militares (Monroy y Sánchez, 2017). En este turbado ambiente emergió, se consolidó un actor no esperado, los denominados grupos “paramilitares”, los cuales eran organizaciones armadas patrocinadas por narcotraficantes y algunos terratenientes, quienes, por medio de la intimidación, desplazamiento forzado y asesinatos sistemáticos, presionaban a comunidades y pueblos enteros considerados auxiliares de las guerrillas (Leal, 2006, pp. 181-227).

Las negociaciones con las FARC abruptamente finalizaron a comienzos de 2002 y, de a poco, la desesperanza volvió a tomarse a la sociedad, lo cual progresivamente hizo aparecer lo que se ha denominado la “euforia por la guerra”, en un contexto de progresiva militarización proveniente de los escenarios de la sociedad civil y ciertos círculos políticos. En este contexto, Álvaro Uribe apareció como un candidato presidencial que reunió en su persona todos los sentimientos de la sociedad respecto a la necesidad de confrontar a la guerrilla contundentemente. Elegido presidente de Colombia en 2002, Uribe atacó de manera frontal y sin cuartel a las FARC. Su programa de gobierno, conocido como la “Seguridad democrática”, era una serie de lineamientos con un fuerte carácter de militarización, que tenía entre sus principales propósitos: el uso de las fuerzas armadas masivamente para combatir a las guerrillas y reestablecer el control del Estado en

el territorio, proteger a la población civil, llevar el sistema de justicia, de salud y educación a aquellas zonas donde no estaban presentes, y destruir la producción de drogas ilegales por medio de las fuerzas armadas. Este programa comenzó a mostrar sus resultados en 2003, gracias al despliegue de las Fuerzas Armadas de Colombia en aquellas regiones que se consideraban bastiones de las FARC, particularmente en el sur y oriente del país, con la eficientemente cooperación estadounidense. En este ambiente, la reelección presidencial de Uribe se caracterizó por dos elementos: primero, lo que he denominado como la “civilización” en la conducción del conflicto armado contra las FARC, por parte del presidente Uribe, en la que la Fuerza Pública colombiana obedecía las órdenes del mando civil sin ninguna oposición. Segundo, este presidente llevó a cabo un controversial proceso de desmovilización de las “Autodefensas Unidas de Colombia” (Torres, 2008), con varios sobresaltos como se verá más adelante.

Durante este periodo, la tasa de mortalidad relativa al conflicto armado interno se incrementó más que nunca antes (CINEP, 2010) Las FARC se convirtieron casi que exclusivamente en el único enemigo interno de la institucionalidad colombiana y, en este sentido, toda la retórica y esfuerzos del Estado fueron dirigidos a destruirlas. Esta situación, a pesar de que otros grupos armados ilegales de diferentes corrientes seguían actuando a lo largo y ancho del país, incluso con más violencia como los remanentes de los grupos paramilitares (Torres, 2008). Dentro de esta lógica de la guerra y el conflicto, fueron denunciados frente a las autoridades judiciales, los denominados “falsos positivos”, los cuales eran una serie de asesinatos extrajudiciales de civiles, quienes eran presentados como miembros de las guerrillas muertos en combate. Este escándalo fue rápidamente acallado gracias a las acciones y prestigio de Uribe en el escenario local e internacional, el cual quedó como un rastro oscuro de este periodo para las Fuerzas Armadas de Colombia (Rodríguez, 2012b).

Entre 2002 y 2008, la ofensiva de la Fuerza Pública sobre las FARC fue radical y sistemática, especialmente en la región sur de Colombia por todos los medios posibles, incluido el soporte de la Fuerza Aérea a las tropas de superficie y el trabajo de inteligencia humana de la Policía de Colombia.²

² Entrevistas con miembros de la Fuerza Pública colombiana, efectuadas entre 2014-2015.

No obstante, la superioridad de las fuerzas estatales fue progresivamente repelida por las fuerzas guerrilleras, por medio de armas no convencionales como taticos y minas antipersonales hechizas, y el uso recurrente de francotiradores. En este aspecto, la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) llegó a ser decisiva para cambiar en el mediano plazo la correlación de fuerzas a favor del Estado, por medio de ataques aéreos a objetivos de alto valor para las FARC, entre estos, tal vez el más significativo fue contra Raúl Reyes, ideólogo de este grupo en 2008, quien delinquía en Ecuador.

En 2010, Juan Manuel Santos, fue elegido Presidente de Colombia, como abanderado y sucesor de la Política de Seguridad Democrática. Durante los primeros años en la presidencia, se caracterizó por llevar a cabo dos perspectivas respecto a la paz y la guerra. Por un lado, el comando las iniciativas militares más importantes contra las FARC usando la capacidad aérea de la FAC para dar de baja a dos importantes líderes de este grupo armado ilegal: el “Mono Jojoy” (2010) y Alfonso Cano (2011), el primero el representante del ala militar de este grupo, y el segundo, el representante del ala política y comandante de las FARC. Por otro lado, y gracias a estas sorprendentes acciones militares, fue posible iniciar un proceso de diálogos de paz con este grupo que tuvieron lugar entre 2012 y 2016.

En este último corte cronológico las acciones militares entre las FARC y las Fuerzas Armadas de Colombia decrecieron sustancialmente. Esto es evidente en las estadísticas oficiales del Ministerio de Defensa de Colombia: en 2012 fueron reportadas 167 acciones armadas en el país por parte de diferentes grupos armados ilegales mientras que en el año 2016 solo 44 (Ministerio de Defensa de Colombia, MDC, 2016). De acuerdo con el CERAC, un *think tank* especializado, después del acuerdo entre las dos partes para reducir el conflicto se pasó de 4 acciones ofensivas llevadas a cabo por las FARC en 2015 a cero acciones en el año 2016, y el reporte de menos de 10 muertos asociados al conflicto armado interno en este mismo año (CERAC, 2016), una cifra muy alentadora teniendo en cuenta el registro histórico asociado al conflicto.

En este sentido, de una fuerte ofensiva contra las FARC a comienzos del siglo XXI para reducir su capacidad de combate se pasó a un dialogo de paz con este grupo, lo cual permitió la progresiva pacificación de amplias

regiones del país, particularmente aquellas que habían sufrido con mayor contundencia las consecuencias del conflicto, entre estas el Cauca, Meta, Antioquia, Chocó (Dávila, Salazar y González, 2016).

Un largo camino lleno de espinas: Iniciativas de búsqueda de la paz

A pesar de que el largo conflicto armado interno ha sido muy difícil de solucionar, a lo largo de la historia reciente del país ha habido varias iniciativas para buscar la paz por medio de la vía negociada. En este apartado se discutirán algunos de los principales intentos, sus características, logros, errores y enseñanzas hasta lograr el proceso que se llevó a cabo con las FARC.

Tal vez la primera iniciativa de negociar un acuerdo de paz en Colombia fue llevada a cabo bajo la presidencia *de facto* del general Gustavo Rojas Pinilla, un oficial activo de las Fuerzas Armadas de Colombia que llegó al poder gracias al soporte de los partidos políticos tradicionales, con el objetivo de reducir la violencia partidista a lo largo y ancho del país en los años cincuenta. Una de las acciones más relevantes de Rojas fue otorgarle estatus político a las guerrillas liberales, quitándoles la etiqueta de “bandoleros”,³ para luego negociar con ellos. En el año 1953, por medio de una serie de leyes se incentivó a los líderes de las guerrillas liberales para que aceptaran un acuerdo de paz con el gobierno e iniciaran un proceso de desmovilización y entrega de armas. Los principales líderes guerrilleros del Tolima, Santander, Antioquia y los Llanos orientales, entre estos Guadalupe Salcedo, Dumar Aljure y Eduardo Fonseca aceptaron la propuesta gubernamental, y decidieron deponer sus armas contra el Estado, debido a su incapacidad de seguir luchando. Se estima que cerca de 20.000 combatientes de estas guerrillas se desmovilizaron (Gómez, 2006). Sin embargo, este pacto entre el gobierno y las guerrillas liberales, no implicó ninguna reforma sustancial que patrocinara la ampliación de la participación política, cambios socioeconómicos o la entrega de las propiedades que habían sido usurpadas durante este violento periodo. De igual modo, la seguridad de los desmovilizados no fue garantizada y decenas de ellos fueron asesinados en hechos misteriosos en el periodo posterior, incluido el famoso líder

³ Esta denominación era de uso extendido en aquel periodo por parte de las instituciones gubernamentales (*Nota del autor*).

Guadalupe Salcedo, quien fue muerto en 1957, lo cual desmotivó a varias disidencias de las guerrillas liberales a entregar sus armas y dejar de luchar contra el Estado, como sucedió con los reductos que quedaron activos en la región del Tolima y el Huila que más tarde darían origen a las FARC como ya se mencionó.

La primera vez que un presidente de Colombia reconoció que las causas del conflicto armado interno en Colombia eran de tipo local y con hondas raíces en el pasado, aparte de las teorías conspirativas que asociaban el conflicto local con el espectro del comunismo internacional en el país, fue Belisario Betancurt (1982-1986). Él llevó a cabo un proceso de paz formal con los principales grupos guerrilleros del país, entre estos las FARC, el ELN y el M-19, entre otros. Para esta labor creó una Comisión de Paz en 1984, la cual estaba compuesta por importantes líderes políticos y civiles, con lo cual se pretendía llegar a un gran acuerdo nacional por la paz. Sin embargo, los militares colombianos estuvieron excluidos de este proceso, en parte por una perspectiva institucional que señalaba que no se podía negociar con ningún grupo guerrillero (Torres, 2015, pp. 274-277).

Entre las principales actividades que se llevaron a cabo en este proceso estuvieron la promulgación de varias leyes que permitían la amnistía y el perdón para crímenes de tipo político, incluida la liberación de varios miembros de la guerrilla que se encontraban en la cárcel, la negociación con cada uno de los grupos guerrilleros para que dejaran la lucha armada, la posibilidad de que se discutieran algunos asuntos relativos a la apertura democrática, derechos humanos, movimientos sociales y reforma agraria. El idealismo del gobierno y la buena voluntad, chocaron con la férrea oposición de varios sectores políticos y militares, pero particularmente la manifestada por las propias guerrillas con las que se estaba negociando, particularmente del M-19, FARC y ELN. Estas mantuvieron su actividad militar e incluso la incrementaron con mayor agresividad contra el Estado y varios objetivos de tipo político (Bejarano, 1990). Esto significó un descrédito para los diálogos tanto en el contexto nacional como internacional

En este contexto de negociación ningún grupo guerrillero aceptó depone las armas, y algunos de ellos lanzaron acciones armadas de alta envergadura, tal vez la más tristemente célebre, fue el ataque al palacio de Justicia

por parte del M-19 en 1985, por medio del cual pretendían presionar al gobierno colombiano para que les otorgara mayores concesiones de tipo político. Sin embargo, los resultados fueron fatales como ya se mencionó. Por su parte, las FARC firmaron un acuerdo con el gobierno de Betancur, conocido como el “Pacto de la Uribe” en 1984, con lo cual se buscaba un cese bilateral del fuego. Infortunadamente este no duró mucho tiempo. Pero en este contexto fue creado el brazo político de la FARC, partido conocido como Unión Patriótica, con el fin de ir ganando terreno en el espacio político y democrático. No obstante, desde su creación los miembros de este partido fueron sistemáticamente asesinados por paramilitares y narcotraficantes, lo cual dejó el sentimiento de que la desmovilización de las FARC era imposible, debido a los peligros que estas corrían en caso de deponer las armas. En un contexto de mutua desconfianza, las negociaciones entre las partes finalizaron fatídicamente en 1986 sin ningún resultado, debido a dos factores: primero, las guerrillas siempre mantuvieron una arrogancia y temeridad sin límites y su verdadero propósito no era firmar ningún acuerdo de paz; segundo, el gobierno fue bastante débil para presionar estos grupos militarmente, lo que impidió que estos cedieran. De acuerdo con el experto Marc Chernick, este proceso de paz no tuvo una agenda clara, varios temas fueron discutidos sin metas específicas hacia donde se pretendía ir y llegar, no hubo un cronograma acordado entre las partes, y varias personas estuvieron facultadas para tomar decisiones en temas muy particulares sin una coordinación general (Chernick, 1996).

Después de este desalentador escenario, y a pesar de ellos varios grupos guerrilleros decidieron entregar sus armas y cesar en la lucha por la vía de estas y entrar al juego político y democrático entre el fin de los años ochenta y comienzo de los noventa, este proceso de paz que se caracterizó por la presión militar por parte del Estado con la puerta abierta para la negociación. Esto sucedió en este momento particular debido a cuatro razones: primera, tras las fallidas negociaciones, los siguientes gobiernos, en este caso Virgilio Barco y César Gaviria, se encargaron de deslegitimar los objetivos políticos de las guerrillas e hicieron una serie de acciones institucionales para expandir los servicios de salud, educación, justicia y seguridad, especialmente en las regiones más golpeadas por los grupos armados ilegales. Esto no siempre tuvo los mejores resultados, pero de cierto modo sirvió

para neutralizar el discurso reivindicativo de las guerrillas. Segunda, estos gobiernos decidieron atacar militarmente a las guerrillas como criminales comunes, de este modo limitaron su estatus político, y condicionaron su participación en política a la entrega incondicional de las armas al estado (Nasi, 2007, pp. 323-325). En este sentido, el presidente Gaviria ordenó en 1990 atacar, con todo el aparato militar estatal, el bastión más importante de las FARC, conocido como “Casa Verde”; sin embargo los resultados no fueron los esperados. Tercera, en la misma línea, a finales de los años ochenta varios grupos guerrilleros incluyendo el M-19, el Quintín Lame y el EPL, progresivamente perdieron su poder armado debido a la acción militar del Estado, y en el caso del M-19 particularmente la pérdida de prestigio frente a la sociedad debido a los hechos del palacio de justicia. Cuarta, un proceso para la promulgación de una nueva constitución política, conocido como la Asamblea Nacional Constituyente, fue puesto en marcha en el cambio de década, lo cual fue atractivo para varios grupos guerrilleros que entre sus reivindicaciones se encontraba esta iniciativa. En este contexto, el presidente Barco logró firmar un acuerdo con el M-19 a comienzos de 1990. De este modo, 800 miembros de este grupo guerrillero depusieron las armas. Igualmente, en los primeros meses de la presidencia del presidente Gaviria los grupos guerrilleros Quintín Lame, Corriente de Renovación Socialista, PRT y EPL depusieron las armas y entraron a la vida civil en un proceso de reinserción a la sociedad.

No obstante, en el cambio de década, varios eventos alteraron el esperanzador escenario que se estaba viviendo respecto a la desmovilización de varios de estos grupos guerrilleros y una nueva oportunidad para la paz y la democracia en Colombia. Por un lado, varios miembros del reciente desmovilizado M-19, fueron asesinados, incluido su carismático líder Carlos Pizarro en 1990 por una asociación de fuerzas paramilitares y narcotraficantes, lo cual dejó un sinsabor en la sociedad. Por otro lado, la violencia del narcotraficante Pablo Escobar contra el Estado alcanzó un nivel inusitado por medio de atentados terroristas, sicariato y asesinatos masivos. Sin embargo, el presidente Gaviria negoció con este criminal común y le dio importantes concesiones, incluso superiores a aquellas otorgadas a los grupos guerrilleros. Por ejemplo, una cárcel otorgada a Escobar para que fuera manejada por él mismo, preservación de parte de sus bienes y una reducción

de sus penas. Por el contrario, las negociaciones entre el presidente Gaviria y las FARC y el ELN estuvieron llenas de tropiezos y no fueron concluidas satisfactoriamente. De este modo, Escobar, que era un criminal sin ningún tipo de causa política, recibió una especie de tratamiento especial por parte de las autoridades mientras que los grupos guerrilleros con los que se intentó negociar eran considerados de segundo nivel, e incluso, que podían ser sometidos por la vía militar. En dos oportunidades, Caracas y Tlaxcala, los grupos guerrilleros más importantes FARC y ELN negociaron con el gobierno de Gaviria, sin embargo, no hubo ningún resultado, sobre todo porque ninguna de las dos partes estaba interesada en el desescalamiento de las operaciones armadas. Además, Gaviria, no estuvo dispuesto a discutir con las guerrillas ningún tema trascendental para el país como lo político, económico o social, pues no consideraba a estos grupos guerrilleros un actor legítimo de la sociedad, sino simples actores ilegales (Rojas, 1996).

La primera perspectiva, considerando el anterior planteamiento, es que las guerrillas de las FARC y el ELN podían ser derrotadas militarmente. Por esta razón cualquier concesión entregadas a estas era un error garrafal. Sin embargo, esta aproximación estaba lejos de ser verdadera completamente. En los años noventa, las FARC alcanzaron su mayor capacidad de combate y fueron capaces de golpear unidades militares del gobierno sistemáticamente con resultados a su favor, incluso capturando importantes grupos de militares y policías colombianos. Este fue el preámbulo para hacer realidad un nuevo proceso de paz entre el presidente Andrés Pastrana y las FARC. Pastrana llegó al poder en 1998 prometiendo a la sociedad colombiana una negociación de alto nivel y total con las FARC para acabar con el miedo y la zozobra que vivía el país. Una de las primeras acciones de este gobierno fue reconocer el estatus político y militar de esta guerrilla por medio de varias leyes y acciones políticas. Quizás, la más controversial de estas, fue otorgar a las FARC un territorio de 42.000 metros cuadrados, conocido como la Zona de Distensión, en la parte sur de Colombia (Rodríguez, 2006).

Esta zona estaba fuera del alcance estatal, y estuvo bajo el control total de las FARC. Allí tuvieron lugar las negociaciones de paz con el gobierno, donde varias personalidades del escenario local e internacional como

políticos, víctimas, congresistas estadounidenses, activistas de la sociedad civil, empresarios, artistas, entre otros, atendieron encuentros con las FARC para discutir temas que se consideraban trascendentales, y tratar de encontrar soluciones. No obstante, un verdadero progreso jamás se dio. Debido a que los diálogos de paz se llevaron a cabo en medio del conflicto entre las dos partes, las FARC usaron este territorio para fortalecer su capacidad militar, para resguardarse de la acción gubernamental tras haber realizado crímenes en otras regiones y para coordinar otras actividades criminales como tráfico de drogas, secuestros. Estas circunstancias, más la poca voluntad real de la guerrilla para llegar a algún punto benéfico para la sociedad en su conjunto, fue quitándole progresivamente el apoyo a este proceso de paz, por parte de la mayoría de colombianos. Como una forma de revivir la esperanza en el proceso, a mediados del año 2001, las FARC liberaron algunos militares que tenían en su poder, en una especie de campos de concentración. A pesar de esto, la situación no mejoró, sino que tendió a empeorar; finalmente los diálogos de paz terminaron abruptamente a comienzos de 2002, cuando el presidente Pastrana ordenó la retoma militar de la Zona de Distensión, debido al secuestro que realizaron las FARC de un avión civil (Torres, 2015, p. 337).

Las negociaciones fallaron porque ni el gobierno ni las FARC estaban realmente interesados en abandonar sus propias posiciones para resolver el conflicto armado interno en Colombia. Por el contrario, mantuvieron sus perspectivas y trataron de hacer todo lo posible por imponerlas a su contendor, particularmente la guerrilla. En esta línea, varias enseñanzas se pueden extraer de estas fallidas negociaciones de paz. Primero, no hubo un mecanismo de monitoreo de parte de la sociedad civil para seguir las negociaciones y llevarlas a un buen término, debido en parte a que muchas organizaciones de la sociedad fueron atacadas sistemáticamente por paramilitares a través de una campaña de terror. Segundo, la comunidad internacional participó marginalmente en las negociaciones como observadores. En este contexto, ninguna de las partes involucradas estuvo comprometida a cumplir unas negociaciones o acuerdos siguiendo los estándares internacionales. Tercero, la agenda de negociación fue dispersa y fragmentada, y demasiadas personas participaron sin una real capacidad de decisión, solo una persona, denominada “Alto comisionado para la paz”, tuvo la jerarquía

gubernamental de organizar los principales puntos a discutir y los avances. De este modo, la falta de una verdadera comisión de personalidades que estuvieran a cargo del proceso hizo que no prosperara. Cuarto, no hubo ninguna condición sobre las FARC respecto a su capacidad y accionar militar, ni tiempos impuestos para cumplir la negociación. En consecuencia, los tiempos lentos de la perspectiva de la guerrilla primaron sobre el tiempo electoral del gobierno con unas consecuencias fatales para el país.

Poco tiempo después, un nuevo proceso de paz tuvo lugar en Colombia, pero esta vez, con un carácter bastante controversial debido al tipo de actor armado con el que se negoció. Entre 2002 y 2005, el gobierno de Colombia, bajo la presidencia de Álvaro Uribe, negoció con los grupos paramilitares aglutinados bajo las denominadas “Autodefensas Unidas de Colombia” (AUC). Este grupo armado ilegal era un conjunto de paramilitares confederados que actuaban en diferentes regiones del país, los cuales, según el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), fueron responsables de más del 80 por ciento de los crímenes cometidos durante el conflicto armado interno. La mayoría de ellos cometidos contra la población civil no combatiente, incluidos crímenes de la humanidad. Las AUC estuvieron dispuestas a negociar con el presidente Uribe, debido a que varios líderes de esta organización ilegal consideraban que Uribe podía garantizar la seguridad a lo largo del país, sobre todo en la lucha contra las guerrillas de izquierda. A pesar de esto, las AUC jamás recibieron algún tipo de estatus político, teniendo en cuenta que congeniaban con los principios contrainsurgentes.

A mediados del año 2003, en el municipio de Santa Fe de Ralito fue firmado un acuerdo entre el gobierno y las AUC, para llevar a cabo una progresiva desmovilización de los combatientes de este grupo y el desmantelamiento de su aparato militar. En este interregno, y de acuerdo a información oficial, 31.671 combatientes de este grupo ilegal depusieron las armas y retornaron a la vida civil. Esta cifra parece haber sido sobredimensionada, sin embargo, esta misma muestra cómo el fenómeno del paramilitarismo estaba extendido en todo el país y cómo varios narcotraficantes se hicieron pasar por paramilitares para reducir sus penas y evitar ser extraditados a los Estados Unidos (López, 2006, pp. 435-436). En este proceso, el Congreso

de Colombia apoyó la controversial “Ley de Justicia y Paz”, la cual pretendía que los máximos líderes y miembros de esta organización criminal a cambio de una reducción de penas confesaran todos sus crímenes y garantizaran la verdad y reparación para las víctimas. No obstante, esto nunca ocurrió satisfactoriamente.

La negociación con las AUC fue más un proceso de entrega de armas y la eliminación del nombre de este grupo armado del escenario local que una realidad para el futuro cercano. Por muchas razones: en primer lugar, a pesar de las cifras oficiales, muchas unidades de las AUC mantuvieron su poder militar y capacidad de influencia mediante la violencia y la intimidación en varias regiones del país, incluso hasta nuestros días. En segundo lugar, el derecho de las víctimas a la verdad nunca fue cumplido satisfactoriamente después de muchos años. Para el 2012 solo 3 líderes y 2000 miembros de este grupo armado ilegal habían confesado algún tipo de crimen. Esta situación muestra la debilidad de “Ley de Justicia y Paz” (ICTJ, 2012). De acuerdo con CNMH, el proceso de paz llevado a cabo con las AUC estuvo lleno de irregularidades, pero dio incluso enseñanzas para los procesos venideros. Entre otros, el proceso como tal fue una “caja negra”, nadie sabía a ciencia cierta qué era lo que se estaba discutiendo y decidiendo, cuantos combatientes eran realmente y asuntos concernientes al compromiso de verdad para las víctimas. Es así como ni la sociedad civil ni la comunidad internacional, con excepción de la Organización de los Estados Americanos, estuvo al tanto de los acuerdos. Además, de una manera bastante chocante, los victimarios recibieron más beneficios que las propias víctimas lo que dejó un contundente sinsabor en el escenario local. Finalmente, varios miembros de las AUC que se desmovilizaron volvieron a reincidir en actividades ilegales, alcanzando una cifra cercana del 30% (Villaraga, 2015).

El acuerdo de paz entre el gobierno de Santos y las FARC, ¿el comienzo del fin?

A pesar de la intensa campaña militar contra las FARC liderada por Juan Manuel Santos, tanto como Ministro de Defensa como Presidente de la República, anunció el 4 de septiembre de 2012 el comienzo de una negociación de paz con este grupo armado ilegal. Para muchas personas esta

fue una declaración sorpresiva, pues Santos representaba la continuación de la Seguridad Democrática del expresidente Uribe y en esta medida un trato contundente hacia este grupo guerrillero. Este pronunciamiento fue el resultado de un proceso de aproximación entre el gobierno y la guerrilla, que, de cierta manera, comenzó cuando el presidente Santos reconoció a comienzo del 2011 que Colombia experimentaba un conflicto armado interno. Algo que iba en contra de la perspectiva de varios mandatarios anteriores, incluido Uribe, quien consideraba que la guerrilla era un simple “amenaza terrorista” sin ninguna motivación de tipo político (Rojas, 2006, pp. 88-91). Las dos partes tuvieron la voluntad política, -no sin incongruencias de parte y parte- para discutir el fin del conflicto armado en Colombia. De acuerdo con el Centro Nacional de Consultoría para finales del año 2012, el 82 por ciento de la población colombiana estaba de acuerdo con los diálogos (Centro Nacional de Consultoría, 2012). Realmente esta negociación fue y es trascendental para Colombia por al menos dos aspectos: primero, las FARC eran la más peligrosa guerrilla para la estructura estatal; y segundo, las dos partes trataron de evitar los errores experimentados en los procesos de paz anteriores.

Las primeras aproximaciones entre el gobierno de Santos y la guerrilla se dieron secretamente en Cuba y Noruega a comienzos del año 2012 gracias al apoyo diplomático de estos países, con el fin de evitar presiones de saboteadores locales a la paz y la influencia que podían tener los hechos locales en las conversaciones previas. En esta operación tan sensible, las partes llegaron a un acuerdo para discutir seis puntos que se consideraban cruciales para terminar el conflicto con las FARC eran estos: 1. Reforma rural integral, 2. Participación política, 3. Fin del conflicto, 4. Problema de las drogas ilícitas, 5. Derechos de las víctimas, 6. Implementación, verificación y ratificación. Los diálogos de paz iniciaron oficialmente en La Habana el 19 de septiembre de 2012. La principal meta era discutir los puntos señalados para resolver las causas del conflicto y por medio de su implementación tratar de evitar la recurrencia del conflicto en un futuro. La delegación de gobierno de Colombia estuvo liderada por Humberto de la Calle, mientras que, en representación de las FARC, estaba Iván Márquez. Igualmente estuvieron involucradas otras figuras representativas de cada una de las partes. Quizás, una de las novedades de este proceso de

paz fue el involucramiento por primera vez en la historia de los procesos de paz en Colombia de miembros de las Fuerzas Armadas en estas conversaciones. Estos fueron los generales retirados Jorge Enrique Mora, por parte del Ejército, y Óscar Naranjo, por parte de la Policía, quienes estuvieron a cargo de discutir temas sensibles respecto a la desmovilización y entrega de las armas por parte de las FARC y al rol que jugarían las Fuerzas Armadas de Colombia en el postconflicto.

Entre 2012 y 2016, el proceso avanzó entre altos y bajos. El secretario de las FARC decidió mantener un cese unilateral del fuego durante varias oportunidades en este lapso para demostrar su voluntad con los diálogos; sin embargo, en varias oportunidades hubo momentos de alta tensión debido a enfrentamientos con las Fuerzas Armadas de Colombia. Entre los combates y secuestros, tal vez el más digno de mención fue la retención-secuestro del general Darío Alzate a finales de 2014. Sin embargo, las dos partes fueron capaces de superar estos altercados y continuar discutiendo los puntos en mención, en parte gracias a la presión internacional y a que las discusiones se realizaron de manera privada en La Habana. Esto permitió que se continuara sin interrupciones. De este modo entre 2013 y mediados del 2014, los puntos relativos a los problemas rurales, participación política y control de las drogas ilícitas fueron negociados y finalizados. Sin embargo, los temas relativos a las víctimas, fin del conflicto y ratificación del acuerdo fueron mucho más sensibles de discutir, debido a la presión local que surgió sistemáticamente del expresidente Uribe y el Centro Democrático. Para tratar de superar esta situación las víctimas fueron invitadas a participar en los diálogos, con el fin de que expresaran su punto de vista acerca de la verdad y la reconciliación. Como consecuencia, el gobierno y las FARC decidieron crear una comisión histórica para rastrear las causas del conflicto armado interno en agosto de 2014. La aproximación a las víctimas permitió revitalizar las negociaciones.

El final de 2014 marcó un punto de no retorno en la negociación de paz: las FARC declararon un cese al fuego definitivo y para comienzo de 2015 el gobierno de los Estados Unidos nombró a Bernard Aronson como enviado especial para el proceso de paz. Sin lugar a dudas, este fue el mayor apoyo diplomático al proceso de negociación, debido al papel determinante

que jugó este país en la última parte del conflicto armado interno, y era una muestra de apoyo a la construcción de la paz venidera. Igualmente, Santos anunció públicamente a mediados de 2015 el fin definitivo de los ataques aéreos sobre las FARC. Además, el general Alberto Mejía, comandante del Ejército de Colombia, señaló que los militares comenzarían una reestructuración a su doctrina para confrontar los nuevos retos en un escenario de postconflicto. En este ambiente prometedor, nunca antes visto en la historia reciente de Colombia, se discutieron los temas restantes de la agenda de negociación. Sin embargo, la oposición interna a los diálogos en Cuba alcanzó un nivel álgido, debido a que Uribe, Alejandro Ordoñez, Procurador General de la Nación en ejercicio, y el Centro Democrático siguieron esgrimiendo, con renovada vehemencia, el argumento relacionado con el hecho que el presidente Santos y el equipo negociador estaban entregando el país a las FARC.

A pesar de esto, entre el final de 2005 y mediados del año 2016, los temas relativos al fin del conflicto, sobre las víctimas, la verdad y la ratificación del acuerdo fueron finalmente aprobados por ambas partes. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó una misión política para Colombia con el fin de apoyar un escenario de postconflicto en enero de 2016, y un mes más tarde el Presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, en la ceremonia de conmemoración de los 15 años del “Plan Colombia”, anunció su apoyo total al proceso de paz en Colombia y el proceso de postconflicto con 450 millones de dólares anuales. Este programa de cooperación fue denominado “Paz Colombia”.

Para contraatacar la oposición local a los diálogos de paz, el presidente Santos estableció el denominado “Pacto por la Paz”, en febrero de 2016. Esta iniciativa estuvo conformada por amplios sectores políticos y sociales interesados en consolidar un acuerdo sostenible. De este modo, el 23 de junio de 2016, el presidente Santos y el máximo líder de las FARC, Timoleón Jiménez, alias “Timochenko”, firmaron un cese bilateral al fuego en La Habana en un evento público en el que participaron varias personalidades internacionales. Este puede ser considerado el primer hecho tangible de paz entre las partes. Siguiendo esta euforia por la paz, el cese al fuego comenzó el 29 de agosto de ese año. Finalmente, el 26 de septiembre en

Cartagena fue firmado el acuerdo definitivo de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC. Este incluía los siguientes puntos:

1. Las FARC se comprometen a entregar todas sus armas y renuncian definitivamente a la búsqueda del poder estatal por este medio.
2. Las FARC aceptan hacer parte de la Jurisdicción Especial por la paz para responder por sus crímenes y contribuir en el esclarecimiento de la verdad para las víctimas.
3. Se acuerda entre las partes la colaboración para luchar contra el narcotráfico, así como proporcionar alternativas a los pequeños productos, al igual que las FARC renuncian a esta actividad ilegal.
4. Por medio de un fondo especial se garantiza la entrega de tierras y asistencia técnica a los campesinos desposeídos.
5. Mejoramiento de las condiciones democráticas para la oposición.
6. El acuerdo debía ser ratificado por el pueblo con la veeduría de la comunidad internacional.

Para muchos observadores ambos eventos fueron apresurados pues no habían sido respaldados por el pueblo colombiano mayoritariamente como lo había ordenado la Corte Constitucional. Sin embargo, el 2 de octubre de 2016, siguiendo los planteamientos del acuerdo, se llevó a cabo un plebiscito que buscaba que los colombianos ratificaran el acuerdo con las FARC. Pero los resultados fueron inesperados, pues más de la mitad de los electores lo rechazaron. Esto en parte debido a la campaña de desinformación que fue planteada por el Centro Democrático contra el acuerdo, lo cual generó un vacío legal y una situación peligrosa respecto al conflicto y la desmovilización de los combatientes de las FARC. La tristeza y la desesperación se tomaron la sociedad colombiana por aquellos días. Sin embargo, después de dos meses de mutuas incriminaciones por lo sucedido en el plebiscito, la sociedad civil por medio de marchas multitudinarias en todo el país y el denominado “Campamento por la Paz” presionaron

al gobierno y las FARC para que alcanzaran un nuevo acuerdo, el cual se logró con pequeñas modificaciones a comienzos de noviembre de 2016 en medio de un bajo perfil mediático. El acuerdo fue finalmente ratificado por el congreso colombiano el 30 de ese mes. Se utilizó esta vía legal para evitar un nuevo fracaso en las urnas, considerando el hecho de que la paz era un supremo bien que debía ser buscado y consolidado. Este parece ser el verdadero comienzo del fin del conflicto armado con las FARC; sin embargo, la violencia y los intereses oscuros están todavía presentes en el escenario ya que docenas de activistas y campesinos siguen siendo asesinados a pesar de la firma y ratificación del acuerdo, lo que parece demostrar que el camino para la paz verdadera estará lleno de espinas por otros años más.

Conclusiones

Colombia es un raro caso en el mundo contemporáneo pues, a pesar de ser una democracia y una economía relativamente sólidas sin mayores sobresaltos, ha sido una sociedad que ha experimentado un recurrente estado de violencia y conflicto interno. Este escenario ha sido alterado de vez en cuando, gracias a los intentos no siempre exitosos, de lograr construir una paz duradera por medio de negociaciones políticas que permitan construir una verdadera democracia y una sociedad pacífica para todos sus ciudadanos. El conflicto colombiano era el último de su tipo en el hemisferio occidental a comienzos del siglo XXI, por la cual varios países, incluidos Cuba, Noruega, Venezuela y Chile estuvieron interesados en colaborar en su finalización por una vía negociada para evitar la alternativa militar. Incluso, a pesar del fallido plebiscito que buscaba que los colombianos apoyaran el acuerdo entre el gobierno y las FARC, la comunidad internacional reconoció la labor desarrollada durante los últimos años y le fue concedido el premio nobel de paz. Al presidente Santos por sus esfuerzos para finalizar el viejo conflicto colombiano que dejó tantas víctimas y, además, por el interés por sentar las bases para una nueva sociedad.

Al respecto se puede decir que la paz es más que la firma de un acuerdo. En este sentido, Galtung (1967) en un clásico estudio señalaba que el fin de las hostilidades solo era una parte de la construcción de la paz. Para que esta se diera realmente era necesario eliminar las causas que habían generado la violencia, y mejorar las condiciones políticas, económicas y sociales

para todos los ciudadanos. De este modo se desestimulaba cualquier intento de oponerse a la autoridad constituida por la vía armada. Los recientes hechos entorno a la paz en Colombia son solo el comienzo de un largo camino, en el que se necesita no solo la voluntad política, sino también la participación de toda la sociedad para construir un nuevo pacto social y un nuevo sentido de nación del cual carecen la mayoría de colombianos, tratando de remover los viejos resentimientos y sumándose ideal proyecto de construir otra sociedad sin los errores del pasado. De igual modo, es indispensable que el ELN se sume a este proceso de pacificación para que sin los retos de algún actor político armado en la búsqueda del poder se puedan echar a andar iniciativas institucionales de alto nivel que beneficien al conjunto de la sociedad y permitan al país ocupar el lugar que se merece en el mundo contemporáneo.

Referencias

- Braun, H. (1987). *Mataron a Gaitán: Vida pública y violencia urbana en Colombia*. Bogotá: Universidad Nacional.
- Bejarano, A. M. (1990). Estructuras de paz y apertura democrática: un balance de las administraciones Betancur y Barco. En F. Leal y L. Zamosc (Eds.), *Al filo del caos: crisis política en la Colombia de los años 80* (pp. 57-124). Bogotá: Tercer Mundo.
- Castro, G. (2012). *Operación Pablo Escobar*. Bogotá: Planeta.
- Centro Nacional de Consultoría (2012). Imagen del presidente Juan Manuel Santos (Diciembre de 2012). Bogotá: Centro Nacional de Consultoría. Recuperado de https://docs.wixstatic.com/ugd/c967c2_ddae7fa18bb14965b4b69a9c5caca9f5.pdf
- CERAC. (2016). *Monitor de desescalamiento del conflicto armado interno en Colombia*. Bogotá: CERAC. Recuperado de <http://blog.cerac.org.co/monitor-de-desescalamiento-del-conflicto-armado-interno-en-colombia-8>
- CINEP. (2010). *El legado de las políticas de Uribe: Retos para el gobierno de Santos* (Informe especial). Bogotá: CINEP.
- Chernick, M. (1996). Aprender del pasado: Breve historia de los procesos de paz en Colombia (1982-1996). *Colombia internacional*, (36), 4-8.
- Dávila, A., Salazar, G. y González, A. (2016). *El conflicto en contexto: Un análisis en cinco regiones colombianas, 1998-2014*. Bogotá: Javeriana.
- Donadio, A. y Galvis, S. (2002). *El jefe supremo: Rojas Pinilla en la violencia y en el poder*. Medellín: Hombre Nuevo Editores.
- Galtung, J. (1967). *Theories of Peace: A synthetic Approach to Peace Thinking*. Oslo: International Peace Research Institute.
- Garreton, M. A. (1997). Revisando las transiciones democráticas en América Latina. *Nueva Sociedad*, 148, 20-29.

- GMH. (2013) ¡Basta ya! Colombia: Memorias de guerra y dignidad. Bogotá: Imprenta Nacional.
- Gómez, E. (2006). Las guerrillas liberales. *Credencial historia*, (202), 4-6.
- Guzmán, G., Fals-Borda, O. y Umaña, E. (2005). *La violencia en Colombia, Volumen I*. Bogotá: Taurus.
- ICTJ. (2012). *En profundidad: El proceso de justicia y paz en Colombia*. Recuperado de <https://www.ictj.org/es/news/en-profundidad-el-proceso-de-justicia-y-paz-en-colombia>.
- Kalmanovitz, S. (2003). *Economía y nación: Una breve historia de Colombia*. Bogotá: Norma.
- López, A. (2006). Narcotráfico, ilegalidad y conflicto en Colombia. En F. Gutiérrez (coord. académico), *Nuestra guerra sin nombre* (pp. 406-439). Bogotá: Norma.
- Medina, M. (1986). La resistencia campesina en el sur del Tolima. En *Pasado y presente de la violencia en Colombia* (pp. 233-263). Bogotá: Cerec.
- Ministerio de Defensa de Colombia. [MDC]. (2016). *Logros de la Política de Defensa y Seguridad: Todos por un nuevo país*. Bogotá: Ministerio de Defensa.
- Monroy, C. y Sánchez, F. (2017). Foreign Policy Analysis and the Making of Plan Colombia. *Global Society, Vol.* (31), 245-271.
- Monterrosa, H. (16 de noviembre de 2017). Según el Banco Mundial, Colombia es el segundo país más desigual de América Latina. *La República*. Recuperado de <https://www.larepublica.co/economia/segun-el-banco-mundial-colombia-es-el-segundo-pais-mas-desigual-de-america-latina-2570469>
- Nasi, C. (2007). *Cuando callan los fusiles: Impacto de la paz negociada en Colombia y en Centroamérica*. Bogotá: Norma.
- Palacios, M. (2006). *Between Legitimacy and Violence: A history of Colombia, 1875-2002*. Durham: Duke University Press.

- Pedrerros, J. A. (2016). *Wars and violence in Colombia*. Trabajo no publicado.
- Rodríguez, S. M. (2006). Colombia: ¡Sociedad al borde del precipicio! El difícil camino hacia la paz. *Iberoamericana Quinqueecclesiensis*, 4, 459-490.
- Rodríguez, S. M. (2008). Algunas consideraciones sobre servicio militar y democracia en Colombia. En A. Vargas (Ed.), *Perspectivas actuales de la seguridad y la defensa en Colombia y en América Latina* (pp. 25-49). Bogotá: UNAL.
- Rodríguez, S. M. (2012a). Colombia Palace of Justice Siege (1985). En F. Shanty (Ed.), *Counterterrorism: From the Cold War to the War on Terror* (pp. 118-121). California, Praeger Security International.
- Rodríguez, S. M. (2012b). Derecho internacional, desnacionalización de la tropa y derechos humanos en Colombia. En A. Vargas (Coord.), *El prisma de las seguridades en América Latina* (pp. 237-255). Buenos Aires: CLACSO.
- Rojas, D. M. (2006). Balance de la política internacional del gobierno de Uribe. *Análisis Político*, (57), 85-105.
- Rojas, F. (1996). *Procesos de paz y negociación en Colombia* (seminario). Bogotá: Woodrow Wilson International Center for Scholars; UNIANDES.
- Sáenz, E. (2002). *Colombia años 50: Industriales, política y diplomacia*. Bogotá: UNAL.
- Thoumi, F. (1994). *Economía, política y narcotráfico*. Bogotá: Tercer Mundo.
- Torres, C. (2008). Conflicto interno y Fuerzas Armadas colombianas, 1982-2002. En C. Torres, y S. Rodríguez (Eds.), *De milicias reales a militares contrainsurgentes* (pp. 239-362). Bogotá: Editorial Javeriana.
- Torres, C. (2015). *Colombia siglo XX*. Bogotá: Javeriana.
- Villaraga, Á. (2015). *Desmovilización y reintegración paramilitar. Panorama pos acuerdos con las AUC*. Bogotá: CNMH.

